

MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2019, DE 10 DE ABRIL, DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y DE LA LEY 14/1995, DE 21 DE ABRIL, DE INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

FICHA RESUMEN EJECUTIVO

Consejería/Órgano proponente	Consejería de Presidencia, Justicia e Interior/ Dirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano.	Fecha	2021
Título de la norma	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2019, DE 10 DE ABRIL, DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y DE LA LEY 14/1995, DE 21 DE ABRIL, DE INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CAPÍTULO ESPECÍFICO DENTRO DE LA LEY ÓMNIBUS).		
Tipo de Memoria	Extendida <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutiva <input type="checkbox"/>		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	La modificación de la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid así como de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.		

Objetivos que se persiguen	Promover la simplificación administrativa, la reducción de cargas administrativas, la eliminación de duplicidades en la norma (así como en relación con otras normas en ámbitos distintos), así como adaptar la regulación a la realidad de la actividad de la Administración pública y mejorar la redacción de determinados preceptos, acercando la regulación autonómica a la norma estatal.
Principales alternativas consideradas	Mantener la actual situación, lo cual mantiene el régimen estricto, ambiguo y con elevado nivel de cargas administrativas de la vigente norma.
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de norma	Ley.
Estructura de la Norma	<p>Parte expositiva: Preámbulo conjunto de la Ley Ómnibus.</p> <p>Parte dispositiva: consta de 1 Capítulo, relativo a la modificación de la Ley de Transparencia y Participación y de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, dentro de la Ley Ómnibus, que contiene a su vez 2 artículos.</p>
Informes recabados	<p>Durante la tramitación del anteproyecto, se irán recabando todos los informes y dictámenes que resulten preceptivos y cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto, destacando los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Trámite de audiencia e información pública. -Observaciones de los centros directivos competentes, en especial, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Trámite de consulta pública	No se evacuará el trámite de consulta pública previa al haberse declarado la urgencia de su tramitación.
------------------------------------	--

Trámites de audiencia e información pública	El Proyecto de Ley se someterá a trámite de audiencia e información públicas a través de su publicación en el Portal antes citado.
ANÁLISIS DE IMPACTOS	
ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS	La Comunidad de Madrid tiene atribuida, a través de su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno (artículo 26.1.1), así como en el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (artículo 26.1.3) y, en el marco de la legislación básica del Estado, en el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen local y régimen jurídico de la Administración pública de la Comunidad de Madrid y los entes públicos dependientes de ella (artículo 27.1 y 2), todo ello al amparo de lo previsto en el art. 149.1 de la Constitución Española.

IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO	Efectos sobre la Economía en general	La propuesta tiene efectos positivos sobre la economía en general, en especial en lo relativo a la mejora de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y organizaciones madrileñas.
	En relación con la competencia.	<input checked="" type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.
	En relación con la unidad de mercado y competitividad	La norma tiene efectos favorables sobre la unidad de mercado y la competitividad, al acercar su regulación a la norma estatal en vigor y el régimen de otros registros de transparencia existentes en España.
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	La norma supone una reducción de obstáculos administrativos, tanto internos como externos, en las relaciones de la Administración con las empresas y ciudadanos, y en la propia actividad administrativa.
	Desde el punto de vista de los presupuestos	La norma no afecta a los presupuestos de la Comunidad de Madrid ni a los de otras Administraciones Territoriales.

IMPACTO DE GÉNERO	<p>La norma, por razón de su contenido, tiene un impacto de género nulo.</p> <p>Para su análisis se recabará el informe de la Dirección General de Igualdad.</p>
OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS: INFANCIA, MENOR ADOLESCENCIA, FAMILIA, IDENTIDAD DE GÉNERO	<p>No se prevén.</p> <p>Para su análisis se recabarán los informes de las Direcciones Generales competentes en la materia.</p>
OTROS IMPACTOS O CONSIDERACIONES	<p>Esta norma no tiene otros impactos destacables.</p> <p>No se realizan otras consideraciones.</p>

MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO **NORMATIVO**

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2019, DE 10 DE ABRIL, DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y DE LA LEY 14/1995, DE 21 DE ABRIL, DE INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

I.- INTRODUCCIÓN.

La presente memoria se ha elaborado tomando como referencia lo previsto en los artículos 6 y 7 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, y adaptándose a la Guía Metodológica vigente, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009.

II.- OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.

1.- MOTIVACIÓN.

a) Causas de la propuesta.

La ley de Transparencia vigente se muestra ciertamente rígida, imprecisa en determinados términos, y con un elevado nivel exigencia, que merma la capacidad de interlocución de la Administración pública, somete al sector privado a un elevado nivel de exigencia pública en sus relaciones con aquella, y genera algunas duplicidades con otras exigencias normativas.

b) Marco Normativo.

La legislación básica en la materia se encuentra en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), a cuyo efecto se dictó la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, cuya modificación se propone, que, al mismo tiempo, llevó a cabo su desarrollo, esencialmente en materia de publicidad de la información, en la que partiendo de los mínimos establecidos por la norma estatal, hizo una relación pormenorizada de los distintos extremos que debían darse a conocer a todas las personas sin necesidad de una solicitud previa y sin perjuicio de que los mismos se ampliasen en función de las demandas ciudadanas o de su relevancia y utilidad para las personas, la sociedad y la actividad económica.

c) Colectivos o personas afectadas.

El anteproyecto de ley, en lo relativo a la modificación de la norma que se propone, afecta a las organizaciones y ciudadanos, en sus relaciones con la Administración pública, y a la propia Administración, en su funcionamiento interno.

d) Interés público afectado.

La propuesta tiene por objeto promover la simplificación administrativa, la reducción de trabas y cargas administrativas, la eliminación de duplicidades en la norma, así como adaptar la regulación a la realidad de la actividad de la Administración pública y mejorar la redacción de determinados preceptos. Todos estos objetivos redundarán en una mejora de la transparencia, y de la forma a través de la cual la Administración pública se relaciona e interactúa con la sociedad madrileña. Asimismo, la armonización y coordinación normativa, suponen principios sobre los cuales debe asentarse la actividad de las Administraciones públicas, en especial en países con un elevado nivel de descentralización política-administrativa.

2.- OBJETIVOS.

La Comunidad de Madrid ha procedido gradualmente a la simplificación administrativa y a la eliminación de las barreras burocráticas mediante normas como la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial y, más recientemente, mediante el Decreto 63/2021, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican diferentes normas reglamentarias para la simplificación normativa y reducción de cargas administrativas.

Continuando con este proceso de simplificación, racionalización administrativa y reducción de cargas burocráticas, se ha detectado la necesidad de modificar la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Una ley, que se muestra especialmente rígida y con un elevado régimen de obligatoriedad, que merma la capacidad de interlocución de la Administración pública, y somete al sector privado a un elevado nivel de exigencia pública, en sus relaciones con aquella. Por ejemplo, instrumentos como el Registro de Transparencia y las consecuentes obligaciones de inscripción en el mismo, suponen un incremento considerable de la carga burocrática para cualquier organización que desee mantener un encuentro con la Administración pública, existiendo un amplio margen de imprecisión y subjetividad en la norma que limita las posibles excepciones ante los supuestos de normal consideración.

Actualmente, cualquier tipo de entidad que desee mantener una reunión con cualquier persona de la Administración pública (con reducidas excepciones), debe inscribirse necesariamente en el registro, por entender que pretende influir en la actividad de la Administración pública, habiendo configurado un régimen excesivamente estricto con una presunción de influencia lobista de cualquier encuentro público-privado que se lleve a la práctica. La propuesta es mantener el carácter obligatorio de la inscripción en el registro, pero delimitando adecuadamente el concepto de “influencia en las políticas de la Administración pública”, quedando fuera de dicha obligación, por ejemplo, los encuentros de mera cortesía, recepción institucional y/o diplomática, así como aquellos en los cuales la Administración regional recibe a una entidad con objeto de conocer su actividad.

En este sentido, el Registro de Lobbies del Ayuntamiento de Madrid (término coloquial que sirve para referirse a los registros de transparencia), se muestra más flexible y acertado en su regulación, pues limita y detalla adecuadamente los supuestos excluidos, al indicar que “las personas físicas o jurídicas que mantengan relaciones con los sujetos obligados, relativas a asuntos de índole particular carentes de relevancia económica o social susceptibles de afectar a intereses colectivos o generales, no estarán sujetas a este registro”. Además, y como es habitual en este tipo de registros, en el Ayuntamiento de Madrid la inscripción “habilita” para mantener reuniones y encuentros con los titulares de los órganos directivos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos y personal eventual, pudiendo exigir este tipo de encuentros. A diferencia de lo anterior, el Registro de la Comunidad de Madrid, opera como trámite previo ineludible, para cualquier encuentro que se celebre con la Administración pública, presumiendo que todos ellos se producen para influir en el diseño de políticas públicas o normas jurídicas.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuenta con su propio registro de grupos de interés, el primero de esta naturaleza en un organismo público. La CNMC define “grupos de interés”, a efectos de su registro, como “las personas físicas y las jurídicas que trabajan por cuenta propia o ajena y que en relación con la actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, muy especialmente, en la conformación de su opinión, actúan en defensa de intereses propios, de terceras personas u organizaciones, o incluso de otros intereses generales”. El registro es voluntario, público, gratuito y completamente electrónico. Como indica la CNMC, los que deseen inscribirse en el registro, podrán darse de alta a través de su web, comprometiéndose a respetar el un Decálogo Ético elaborado por la institución. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha son las únicas comunidades que tienen un registro de transparencia o de “lobbies”. Cataluña cuenta con casi 4.000 grupos de interés registrados en su plataforma, Madrid tiene cerca de 600, y Castilla-La Mancha apenas dispone de 35 inscritos.

En otro orden de cosas, debe mejorarse la redacción de lo que se entiende por “influir en la Administración pública”, con objeto de poder excluir de la inscripción en el registro, aquellos encuentros que la Administración pública, a través de sus altos cargos o incluso de sus empleados públicos, mantenga con personas físicas o jurídicas por mera cortesía, simplemente por el hecho de no negar la recepción a una entidad que desea presentar y compartir sus iniciativas, sin voluntad alguna de influencia o intervención, así como otros supuestos meramente institucionales, clarificando la regulación actual. Se propone una redacción más acertada de lo que debiera considerarse “influir en la Administración pública”.

Se pretende, asimismo, mejorar la regulación de determinados aspectos, como los gastos protocolarios susceptibles de publicación, ya que la redacción de lo que se consideran “gastos protocolarios” es excesivamente imprecisa. Por otro lado, el hecho de que dichos gastos se encuentren en un artículo denominado “retribuciones” plantea dudas sobre su adecuado sentido y naturaleza.

Otro aspecto importante de simplificación normativa y eliminación de trabas administrativas (en este caso, internas), es el relativo a la duplicidad existente a la hora

de presentar la declaración de bienes, derechos y actividades entre la Ley de Transparencia y la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. La declaración prevista en la Ley de Transparencia, publicada en el Portal de Transparencia, debiera ser igualmente válida para la Dirección General competente en materia de Recursos Humanos, surtiendo los efectos previstos en la Ley de Incompatibilidades (eliminando además el trámite de acudir al notario para formalizar dicha declaración).

Por último, se pretende dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación con la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, el cual, de conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, de 17 de julio de 2019, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, acordó que la Comunidad de Madrid asumiera el compromiso de promover la correspondiente iniciativa legislativa para proceder a la supresión del inciso «o para contratar con las Administraciones Públicas» del artículo 84.2.a).3.º de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, dando por resuelta así la discrepancia manifestada en relación al mismo, tal y como fue comunicado al Tribunal Constitucional.

En conclusión, con objeto de promover la simplificación administrativa, la reducción de trabas y cargas administrativas, la eliminación de duplicidades en la norma, así como adaptar la regulación a la realidad de la actividad de la Administración pública y mejorar la redacción de determinados preceptos, se proponen una serie de reformas en ambas Leyes, debidamente justificadas, que además acercan la regulación autonómica a la norma estatal.

3.- ALTERNATIVAS.

No existe, en estos momentos, alternativa viable, por cuanto la ley que se pretende modificar entró en vigor el 1 de enero de 2020 y deben acometerse las reformas necesarias a la mayor brevedad, con objeto de que los efectos de las disfuncionalidades detectadas no se prolonguen demasiado en el tiempo. La alternativa, por tanto, es mantener la actual situación, lo cual mantiene el régimen estricto, ambiguo y con elevado nivel de cargas administrativas de la vigente norma.

III.- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE SU TRAMITACIÓN.

1.- CONTENIDO.

a) Estructura de la propuesta.

El proyecto que se propone (como capítulo independiente de la Ley Ómnibus), incorporaría además algunos párrafos a su parte expositiva. En cuanto a la parte dispositiva, consta de 1 Capítulo, relativo a la modificación de las dos leyes, dentro de

la Ley Ómnibus, que contiene a su vez 2 artículos. Todas las modificaciones van incluidas en distintos apartados de dichos artículos.

El capítulo (único para la modificación de estas leyes), modifica, en su primer artículo propuesto, los artículos 10, 12, 15, 65, 66, 67, 69 y 84 de la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, en su segundo artículo, modifica los artículos 9 y 10 de la ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

b) Principales novedades introducidas respecto a la regulación anterior.

Las reformas propuestas inciden en la simplificación y racionalidad administrativa, así como en la eliminación de cargas administrativas.

En concreto, en la modificación del artículo 10, se simplifica la redacción del precepto y se precisan aquellos encuentros susceptibles de publicación en las agendas de los responsables públicos. En la modificación del artículo 12 se armoniza la regulación existente en las declaraciones de bienes, actividades y derechos que deben presentar los altos cargos, en consonancia con la Ley de Incompatibilidades. En la modificación del artículo 15 se ajusta, en primer lugar, el título del mismo, a la información que contiene, y se propone una redacción relativa a los gastos protocolarios y a las dietas y gastos de viaje (ahora, separados en dos letras), más acorde con la realidad y la práctica habitual. Asimismo, se añade un apartado final en ambos preceptos (12 y 15) limitando a dos años el plazo máximo durante el cual se mantendrá publicada la información relativa a los altos cargos y personal directivo tras el cese del puesto al que se refiera la información publicada, favoreciendo el derecho al olvido del personal afectado, y en consonancia con los límites previstos en la Ley de Incompatibilidad de Altos cargos para el ejercicio de actividades posteriores a su cargo. En la modificación del artículo 65 se mejora la redacción y se propone una nueva definición del concepto “influir en la Administración pública”, como requisito para la inscripción en el registro de transparencia. Por su parte, las modificaciones de los artículos 66, 67 y 69 inciden igualmente en las cuestiones planteadas con anterioridad. Por último, la modificación del artículo 84, responde al conflicto competencial antes planteado.

Por último, la modificación de los artículos 9 y 10 de la ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, pretende eliminar la duplicidad de la declaración de bienes, actividades y derechos de los altos cargos de la Comunidad de Madrid.

c) Análisis jurídico.

La legislación básica en la materia se encuentra en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), a cuyo efecto se dictó la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, cuya modificación se propone, que, al mismo tiempo, llevó a cabo su desarrollo, esencialmente en materia de publicidad de la información, en la que partiendo de los mínimos establecidos por la norma estatal, hizo una relación pormenorizada de los distintos extremos que debían darse a conocer a todas

las personas sin necesidad de una solicitud previa y sin perjuicio de que los mismos se ampliasen en función de las demandas ciudadanas o de su relevancia y utilidad para las personas, la sociedad y la actividad económica.

d) Adecuación a los principios de buena regulación establecidos por la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

En la elaboración del presente anteproyecto se han tenido en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, así como en el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, lo que determina que esta norma con rango de ley quede debidamente justificada, en tanto la misma se adecúa a los principios anteriores, denominados de buena regulación.

De este modo, la presente norma, en lo que se refiere a su adecuación a los principios de necesidad y eficacia, encuentra su justificación en razones de interés general, dado el compromiso de simplificación y racionalización administrativa adquiridos por este Gobierno. Desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, éste resulta también cumplido con la tramitación de la norma como proyecto de ley, dado que es el instrumento imprescindible para garantizar la consecución de los objetivos que se persiguen, teniendo en cuenta el rango de la norma cuya modificación se propone.

Precisamente, la tramitación como ley garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica, básico en nuestro ordenamiento, y en base al cual se establecen las reglas del juego para todos los operadores jurídicos y personas implicadas, lo que genera un entorno de certidumbre. Asimismo, la presente propuesta resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico, inspirándose en la regulación existente en la materia a nivel nacional, autonómico y europeo, lo cual refuerza la existencia de un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas, en sus relaciones también con las Administraciones públicas. Igualmente se cumple el principio de transparencia, al garantizarse, en la tramitación del proyecto de ley, la participación activa en su elaboración en la fase de audiencia e información públicas. Por último, el principio de eficiencia también resulta garantizado, al establecer la nueva norma una reducción de cargas administrativas.

e) Tramitación y consultas.

No será evacuado el trámite de consulta pública previa al haberse declarado la urgencia de su tramitación, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid y en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid.

La propuesta será sometida al trámite de audiencia e información públicas a través de su publicación en el Portal de Transparencia, al amparo de lo dispuesto en el precitado Decreto 52/2021, y se procederá a recabar informe de la Dirección General de Igualdad para valorar el impacto por razón de género. De igual modo, para determinar el impacto normativo que pueda tener en materia de infancia, adolescencia y familia, así como por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, se recabarán los respectivos informes de las Direcciones Generales competentes en las anteriormente citadas materias.

Asimismo, durante la tramitación del anteproyecto, se irán recabando todos los informes y dictámenes que resulten preceptivos de los centros directivos competentes. En concreto, se ha solicitado informe a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, al verse afectados dos artículos de la Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid que afectan a los registros de altos cargos obrantes en poder de dicho centro directivo. Del informe recibido por el referido centro directivo, se han recogido las observaciones de la clarifican el texto en el sentido de aludir a los altos cargos del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades, no compartiendo la propuesta de volver a hacer referencia expresa a dos declaraciones distintas (de bienes y derechos por un lado, y de actividades por otro), en la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, pues el objetivo que se persigue es unificar la declaración de los altos cargos en una sola, tanto en lo relativo a las dos Direcciones Generales que necesitar tomar conocimiento de dicha información, como en relación a los tres registros existentes que les afectan (de bienes y derechos, de actividades, y de transparencia), pues de la declaración conjunta que se elabore por ambas direcciones generales, puede extraerse sin incrementar la carga administrativa, la información que sea necesaria para cada registro.

IV.-ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.

La propuesta se adecúa al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero. Así, la Comunidad de Madrid tiene atribuida, a través de su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno (artículo 26.1.1), así como en el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (artículo 26.1.3) y, en el marco de la legislación básica del Estado, en el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen local y régimen jurídico de la Administración pública de la Comunidad de Madrid y los entes públicos dependientes de ella (artículo 27.1 y 2), todo ello al amparo de lo previsto en el art. 149.1 de la Constitución Española.

V.- ANÁLISIS DE IMPACTOS.

1.- IMPACTO ECONÓMICO GENERAL.

La propuesta no presenta impacto económico alguno.

2.- IMPACTO PRESUPUESTARIO.

La modificación que se pretende con esta propuesta no tiene, en principio, ninguna incidencia en los presupuestos de la Comunidad de Madrid ni ningún gasto extrapresupuestario. Su elaboración no implica coste en personal ni precisa inversión alguna. Asimismo, el contenido del proyecto no tiene incidencia en los presupuestos de otras Administraciones Territoriales, por lo que se descartan posibles efectos financieros negativos como consecuencia del proyecto normativo. Por tanto, desde este órgano proponente, se estima que la propuesta no tiene, en ningún caso, impacto alguno de naturaleza presupuestaria ni del gasto público consolidado.

3.- ANÁLISIS DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS.

La norma no supone creación de cargas administrativas nuevas; bien al contrario, las modificaciones previstas en la norma supondrán la supresión de trabas y obstáculos en la actividad de los ciudadanos y las organizaciones en sus relaciones con la Administración pública. La estimación del ahorro de cargas administrativas se presenta en el siguiente cuadro, tomando como referencia el número de inscritos en el Registro de Transparencia¹, y considerando la reducción en un 50% en el número de inscritos anuales en el registro de transparencia, consecuencia de la eliminación de la necesidad de inscripción de todas entidades que interactúan de cualquier forma (excluyendo ahora los encuentros de mera cortesía u otros supuestos):

ARTÍCULOS	CARGA ADMINISTRATIVA	COSTE	UNIDADES	SUBTOTAL
65.3, 66, 67: su modificación implica la eliminación de la carga.	Presentar una solicitud electrónica	5 €	300	1.500 €
	Inscripción electrónica en un registro	50 €	300	15.000 €
	Aportación datos	2 €	300	600 €
	Comunicación electrónica	2 €	300	600 €
	Información a terceros	100 €	300	30.000 €
TOTAL				47.700 €

¹ El Registro se puso en funcionamiento en septiembre de 2020, y desde entonces se encuentran inscritas en torno a 600 entidades. Se toman como referencia, por tanto, las cargas administrativas de ahorro que supone, al año, la reducción en un 50% del número de inscritos anuales.

4.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

Por razón del contenido que se propone, esta propuesta no contiene disposiciones específicas relacionadas con el género ni ningún aspecto de cuya aplicación se puedan derivar, directa o indirectamente, efectos positivos o negativos sobre la igualdad de género o contra la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por lo tanto, su impacto por razón de género es nulo. Para su análisis se recabará el informe de la Dirección General de Igualdad.

5.- IMPACTOS SOCIALES

Por razón del contenido de la norma, no se prevén impactos ni consideraciones en materia de infancia, adolescencia y familia ni por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género ni en ningún otro ámbito.

Para su análisis se recabarán los informes de las Direcciones Generales competentes en la materia.

6.- OTROS IMPACTOS Y CONSIDERACIONES.

- **Impactos medioambientales, de accesibilidad, de salud.**

No se espera que esta norma tenga impactos medioambientales destacables, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ni sobre la salud.

- **Otros posibles impactos.**

No se prevén otros posibles impactos ni se han tenido en cuenta otras consideraciones.

VI.- EVALUACIÓN EX POST DE LA NORMA.

Al igual que se hizo tras la aprobación de la norma cuya modificación se propone, la Dirección General competente en materia de Transparencia de la Comunidad de Madrid, evaluará el cumplimiento, efectos e impacto de la norma modificada.

Madrid, a fecha de firma

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

D. Pablo García-Valdecasas Rodríguez de Rivera